

---


PODER ESPECIAL / LINK AUDIENCIA Y ACCESO EXP DIGITAL 76001310501020230030500 ESPERANZA MELO YEPES

---

Desde Baesas decimolab <lab10baesas@gmail.com>

Fecha Lun 14/07/2025 08:21 AM

Para Juzgado 10 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j10lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 3 archivos adjuntos (3 MB)

COMITÉ ESPERANZA MELO YEPES.pdf; SUSTITUCION PODER BAE.pdf; ANEXOS PODER BAE.pdf;

**Señor:**  
**JUEZ DÉCIMO (10) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI**  
[j10lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j10lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**E. S. D.**

**REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL**  
**DEMANDANTE: ESPERANZA MELO YEPES**  
**DEMANDADO: COLPENSIONES**  
**RADICACIÓN: 76001310501020230030500**

**ASUNTO: PODER ESPECIAL / LINK AUDIENCIA Y ACCESO EXP DIGITAL**

Cordial saludo.

Me permito remitir documentación pertinente para la audiencia programada para el día martes 15 de julio 8:30am

Respetuosamente.

**NATALIA SÁNCHEZ ROCHA.**  
**Abogada.**  
**BAE Bufete de Abogados Expertos**

Señor:

JUEZ DÉCIMO (10) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

[j10lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j10lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E.

S.

D.

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL  
DEMANDANTE: ESPERANZA MELO YEPES  
DEMANDADO: COLPENSIONES  
RADICACIÓN: 76001310501020230030500

ASUNTO: PODER ESPECIAL

**JAHNNIK INGRID WEIMANN SANCLEMENTE**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 66.959.623 de Cali (Valle), en mi calidad de representante legal de la firma **BAE BUFETE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S.**, bajo el NIT 901.286.009-1 sociedad con domicilio principal la ciudad de Cali, actuando en nombre y representación de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones para realizar las actuaciones necesarias para la defensa jurídica de esta Entidad dentro del proceso del asunto, mediante poder general otorgado por la escritura pública No. 44 del 10 de Enero de 2025 de la Notaria Once (11) de Bogotá.

A su vez, manifiesto que a través del presente escrito **SUSTITUYO** poder a la abogada **ANGIE NATALIA SÁNCHEZ ROCHA** igualmente mayor y domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.010.241.951 expedida en Bogotá D.C, y portadora de la Tarjeta Profesional No. 396.925 del C.S.J., para que realice la defensa y continúe con el debido proceso para que ejerza la defensa jurídica en los intereses de Colpensiones.

En consecuencia, sírvase reconocer personería a la mencionada abogada, en los términos del presente mandato.

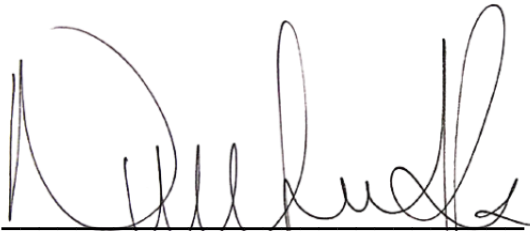
Renuncio a término de notificación y ejecutoria del auto favorable.

De usted, respetuosamente,

Acepto,



**JAHNNIK WEIMANN SANCLEMENTE**  
C.C. No. 66.959.623 de Cali  
T.P. No. 121.179 del C. S. J.



**ANGIE NATALIA SÁNCHEZ ROCHA**  
C.C. 1.010.241.951 de Bogotá.  
T.P. 396.925 del C.S de la J.

cadena.

República de Colombia

10-44

Aa097118768

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 44

CUARENTA Y CUATRO

FECHA: DIEZ (10) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025)

OTORGADA EN LA NOTARÍA ONCE (11) DE CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

CLASE DE ACTO: PODER GENERAL

PODERDANTE:

Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES EICE. NIT. 900.336.004-7

APODERADO:

BAE BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S NIT. 901.286.009-1

En la Ciudad de Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia, a los diez (10) días del mes de Enero del año dos mil veinticinco (2.025), ante el Despacho de la Notaría Once (11) del Círculo de Bogotá D.C. cuyo Notario Encargado es el Doctor NELSON JAIME SANCHEZ GARCIA, de acuerdo con la resolución No.13922 del 13 de Diciembre de 2024, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, se otorgó Escritura Pública que se consigna en los siguientes términos:

Compareció con minuta escritura DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía número 79.983.390 expedida en Bogotá D.C., de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, con domicilio en Bogotá D.C. en su condición de Representante Legal Suplente de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, EICE con NIT. 900.336.004-7, calidad que acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien manifestó que en aplicación de los artículos 440 y 832 del Código de Comercio, el artículo 2142 del Código Civil y la Circular básica Jurídica Capítulo III Título I Parte 1 de la Superintendencia Financiera de Colombia, confiere poder general, amplio y suficiente a BAE BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S. con NIT. 901.286.009-1, en nombre y representación de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7, en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA. – Otorgo por el presente instrumento público PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE a partir de la suscripción de la presente escritura pública a BAE BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S. con NIT.

10-11-24

11821JABRATCO

cadena.

República de Colombia

10-44

Aa097118768

901.286.009-1, para que ejerza la representación judicial y extrajudicial, tendiente a la adecuada defensa de los intereses de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, ante las Autoridades Judiciales y el Ministerio Público, realizando todos los trámites, actos y demás gestiones requeridas en los procesos o procedimientos en los cuales la administradora intervenga como parte pasiva, y que se adelanten en cualquier lugar del territorio nacional, facultad esta que se ejercerá en todas las etapas procesales y diligencias que se requieran atender ante las mentadas autoridades, incluidas las audiencias de conciliación judicial y extrajudicial. El poder continuará vigente en caso de mi ausencia temporal o definitiva como Representante Legal Suplente de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7, de conformidad con el inciso 6 del artículo 76 del Código General del Proceso, el cual establece que "tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda." - -

CLÁUSULA SEGUNDA. – El representante legal de BAE BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S. CON NIT. 901.286.009-1, queda expresamente autorizado, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, para sustituir el poder conferido dentro de los parámetros establecidos en el artículo 77 del Código General del Proceso, teniendo con ello facultad el apoderado sustituto para ejercer representación judicial y extrajudicial, de tal modo que en ningún caso la Entidad poderdante quede sin representación judicial y extrajudicial, y en general para que asuma la representación judicial y extrajudicial de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES -

La representación que se ejerza en las conciliaciones sólo podrá adelantarse con sujeción a las directrices del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, CLÁUSULA TERCERA. – Ni el representante legal de BAE BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S. CON NIT.901.286.009-1, ni los abogados que actúen en su nombre podrán recibir sumas de dinero en efectivo o en consignaciones por ningún concepto.

Queda expresamente prohibida la disposición de los derechos litigiosos de la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES por parte del

10-11-24

11821JABRATCO

cadena.

República de Colombia

10-44

Aa097118768

representante legal y de los abogados sustitutos que actúen en nombre de BAE BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S. con NIT.901.286.009-1, sin la autorización previa, escrita y expresa del representante legal principal o suplente de la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES y/o del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones.

CLÁUSULA CUARTA. – Al representante legal y a los abogados sustitutos que actúen en nombre de BAE BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S. con NIT. 901.286.009-1, les queda expresamente prohibido el recibo o retiro de las órdenes de pago de depósitos judiciales que se encuentren a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, con NIT. 900.336.004-7.

(HASTA AQUÍ LA MINUTA)

Se protocoliza autenticación biométrica.

El(la)(los) compareciente(s) hacen constar que ha verificado cuidadosamente sus nombres completos, estado civil, el número de sus documentos de identidad. Declara(n) que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son correctas y, en consecuencia, asume la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud en los mismos. Conoce la ley y sabe que el Notario responde por la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados.

ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN. Leído el presente Instrumento por el (la) (los) compareciente(s) y advertida sobre las formalidades legales lo aprobó y firma conmigo el Notario que doy fé.

Resolución No.00773 del 26 de Enero 2024. Superintendencia de Notariado y Registro.

Derechos notariales \$ 81,900

IVA \$ 44,659

Fondo Nacional del Notariado \$ 9,200

Superintendencia de Notariado y Registro \$ 9,200

Se empleo(aron) la(s) hoja(s) de papel notarial con código de barras números:

Aa097118768/ Aa097118769.

10-11-24

11821JABRATCO

cadena.

República de Colombia

10-44

Aa097118768

ESCRITURACIÓN-RESPONSABLES

Ratifico Diego Digo DPG

Líquido Diego Rev / Legal

Facturó Diego Identif / Huellas

Cerró Diego Toma de firma en el documento Diego

10-11-24

11821JABRATCO

Diego Alejandro Urrego Escobar

CC 79983390 de Bogotá

Actuando como representante legal Suplente de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7

Teléfono :2170100 ext. 1588

E-MAIL: poderesjudiciales@colpensiones.gov.co

10-11-24

11821JABRATCO





Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 19/06/2025 10:28:09 am

Recibo No. 10037013, Valor: \$11.600  
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08255NMT3Q

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: "BAE" BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S.  
Nit.: 901286009-1  
Domicilio principal: Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 1051235-16  
Fecha de matrícula en esta Cámara: 15 de mayo de 2019  
Último año renovador: 2025  
Fecha de renovación: 12 de marzo de 2025  
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CALLE 5 NORTE #1N - 73 BRR CENTENARIO  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico: diradmon@baeabogados.com  
Teléfono comercial 1: 8819161  
Teléfono comercial 2: 3118694935  
Teléfono comercial 3: No reportó  
Dirección para notificación judicial: CALLE 5 NORTE #1N - 73 BRR CENTENARIO  
Municipio: Cali - Valle  
Correo electrónico de notificación: diradmon@baeabogados.com  
Teléfono para notificación 1: 8819161  
Teléfono para notificación 2: 3118694935  
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica "BAE" BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Página: 1 de 6



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 19/06/2025 10:28:09 am

Recibo No. 10037013, Valor: \$11.600  
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08255NMT3Q

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 15 de abril de 2019 de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2019 con el No. 8751 del Libro IX, se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada "BAE" BUFETE DE ABOGADOS EXPERTOS S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. La sociedad tendrá como objeto principal prestación de servicios legales y el ejercicio de la profesión liberal de la abogacía. En desarrollo del objeto social la sociedad podrá: A) adelantar defensa jurídica y reivindicación de los derechos humanos de las minorías étnicas afrocolombianas e indígenas; para ello adelantar acciones de tipo civiles, acciones constitucionales, derecho público o privado. Acciones administrativas, penales, laborales, comerciales y el establecimiento de acciones mediante litigio estratégico. B) celebrar toda clase de contratos civiles o comerciales lícitos, que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto social. C) adquirir, enajenar a cualquier título toda clase de inmuebles. D) tomar o dar dinero en préstamo. E) dar o recibir en garantía de obligaciones bienes de cualquier naturaleza. F) garantizar obligaciones de terceros. G) dar en prenda inmuebles e hipotecas. H) adquirir, vender, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar títulos abres y aceptarlos en pago. I) obtener derechos de propiedad sobre marcas, insignias, patentes o privilegios y cederlos a cualquier título. J) podrá ser representante de empresas nacionales o extranjeras con actividades comerciales y que se relacionen con su objeto principal. K) aportar a ella toda clase de bienes, celebrar contratos de sociedades, asociaciones o franquicias. L) celebrar los contratos de prestación de servicios que sean necesarios incluyendo contratos de trabajo, cuentas en participación y cualquier otro contrato legítimo. M) la explotación de negocios que constituyan su objeto y se relacionen directamente con él. N) adquirir o enajenar a cualquier título, intereses, participaciones o acciones en empresas de la misma naturaleza, o fines comerciales. N) obtener y explotar derechos de autor, licencias, concesiones, privilegios, marcas y patentes de invención que tengan relación con las actividades de la sociedad. O) suscribir acciones de capital o tomar participaciones en otras sociedades que tengan por objeto actividades similares o complementarias, transformarse, fusionarse o escindirse. P) celebrar todo tipo de contratos bancarios destinados a facilitar la buena marcha de la empresa. Q) establecer negocios inmobiliarios, para la compra y venta de bienes raíces. R) realizar y participar en procesos de asesoría y consultoría. S) prestar servicios de catering y en general, hacer a su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación de ellos, toda clase de operaciones, ejecutar y celebrar toda clase de actos o contratos civiles comerciales que sean necesarios o convenientes para el logro de los fines que la sociedad persigue para la realización del objeto social. T) intervenir y participar en cualquier tipo de contratación estatal. U)

Página: 2 de 6



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 19/06/2025 10:28:09 am

Recibo No. 10037013, Valor: \$11.600  
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08255NMT3Q

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

brindar asesoría en procesos de: Restitución y formalización de tierras, declaración de bienes baldíos, transferencia gratuita de bienes fiscales urbanos y rurales para el desarrollo de programas de vivienda de interés social, saneamiento de predios rurales con falsa tradición y legalización y adjudicación de predios baldíos rurales. V) asesoría y consultoría seguridad informática.

Las partes acuerdan que las anteriores enunciaciones del objeto social, no son taxativas por lo tanto, sociedad podrá llevar a cabo cualquier actividad lícita y realizar en general todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	*CAPITAL AUTORIZADO*
Valor:	\$6,000,000
No. de acciones:	600
Valor nominal:	\$10,000
	*CAPITAL SUSCRITO*
Valor:	\$6,000,000
No. de acciones:	600
Valor nominal:	\$10,000
	*CAPITAL PAGADO*
Valor:	\$6,000,000
No. de acciones:	600
Valor nominal:	\$10,000

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, llamado director ejecutivo, el cual tendrá uno o dos suplentes, que lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, ambos nombrados por el término de tres años (3) año cuya designación y remoción corresponderá también a la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o

Página: 3 de 6



Camara de Comercio de Cali  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
Fecha expedición: 19/06/2025 10:28:09 am

Recibo No. 10037013, Valor: \$11.600  
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08255NMT3Q

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, Por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

Representación judicial. Se autoriza al representante legal de la sociedad para que conforme a lo establecido en el artículo 75 del código general del proceso, designe los abogados que representaran a la entidad en los procesos judiciales o administrativos que esta asuma e igualmente realice la sustitución de los mismos, para lo cual debe adelantar los trámites de inscripción en el certificado de existencia y representación legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 15 de abril de 2019, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2019 con el No. 8751 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO	JOHN JAIRO TEJADA RUIZ	C.C.14944253

Por Acta No. 004 del 31 de mayo de 2023, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de junio de 2023 con el No. 12035 del Libro IX, se removió del cargo de SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO a JOHN JAIRO TEJADA RUIZ,

Por Acta No. 02 del 16 de marzo de 2023, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de marzo de 2023 con el No. 5041 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JAHHNIK INGRID WEIMANN SANLEMENTE	C.C.66959623

Página: 4 de 6



Recibo No. 10037013, Valor: \$11.600  
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08255NMT3Q

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 003 del 04 de mayo de 2023, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de junio de 2023 con el No. 11677 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO	RAFAEL NUÑEZ LONDOÑO	C.C.1107067265

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910  
Actividad secundaria Código CIIU: 7020  
Otras actividades Código CIIU: 7490

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$1,040,929,653

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU:6910



Recibo No. 10037013, Valor: \$11.600  
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08255NMT3Q

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccc.org.co](http://www.ccc.org.co) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (cnac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

  
Ana M. Lengua B.

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.959.623


WEIMANN SANCLEMENTE

APELLIDOS JAHNNIK INGRID

REPUBLICA DE COLOMBIA

NUMEROS

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1975

CALI (VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA A+ G.S. RH F SEXO

20-JUN-1994 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
SABLOS ABEL VACHOZ TISBES

INDICE DERECHO




A-3100150-00632980-F-0006959623-20141018 0040524157A 1 2813087127

217634

REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

121179 Tarjeta No.

18/03/2003 Fecha de Expedición

02/12/2002 Fecha de Grado

JAHNNIK INGRID

WEIMANN SANCLEMENTE

66959623 Cedula

VALLE Consejo Seccional

SANTIAGO DE CALI Universidad

Presidente Consejo Superior de la Judicatura



Jahnnik Weimann





Consejo Superior  
de la Judicatura

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## RAMA JUDICIAL

### CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

#### TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



NOMBRES:  
**ANGIE NATALIA**

APELLIDOS:  
**SANCHEZ ROCHA**

PRESIDENTE CONSEJO  
SUPERIOR DE LA JUDICATURA

**JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO**

UNIVERSIDAD  
**LA GRAN COLOMBIA/BTA**

FECHA DE GRADO  
**23/09/2022**

CONSEJO SECCIONAL  
**BOGOTÁ**

CEDULA  
**1010241951**

FECHA DE EXPEDICIÓN  
**06/12/2022**

TARJETA N°  
**396925**

Powered by



CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NÚMERO 1.010.241.951

SANCHEZ ROCHA

APELLIDOS

ANGIE NATALIA

NOMBRES



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1998  
BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)



LUGAR DE NACIMIENTO

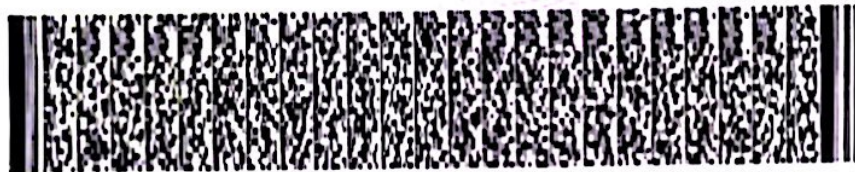
1.55 A+  
ESTATURA G.S. RH

F  
SEXO

06-OCT-2016 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-00967867-F-1010241951-20161124

0052286851A 1

46625648



## **CERTIFICACIÓN NO. 194412023**

### **La Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial**

#### **CERTIFICA**

Que tal y como consta en el Acta No. 199-2023 del 24 de noviembre de 2023 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, respecto del caso **ESPERANZA MELO YEPES** identificado(a) con cédula de ciudadanía No **39554193**, en proceso bajo radicado No **76001310501020230030500**, quien pretende; que se declare la ineficacia del traslado del RPM al RAIS, dicho órgano decidió:

NO proponer fórmula conciliatoria, en consideración a lo siguiente:

El literal “b” del artículo 13 la Ley 100 de 1993, expresa: “La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.”

Por su parte, el literal “e”, ibídem, establece: “<aparte subrayado condicionalmente exequible><literal modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez;”

La situación es la siguiente:

En el caso de estudio, la señora: ESPERANZA MELO YEPES, identificada con C.C 39.554.193, nació el 01 de marzo de 1962, a la fecha de presentación de la demanda contaba con 61 años de edad, es decir, está a menos de 10 años de cumplir con el requisito de edad para tener derecho a la pensión de vejez, se afilió al principio al RPM administrado por el ISS hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES, luego se trasladó a COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A, entidad donde actualmente se encuentra pensionada, percibiendo una pensión de vejez desde el mes de abril de 2023.

Así las cosas se tiene que no mostro inconformidad alguna en la administración de sus cotizaciones en el fondo privado mencionado, tanto así que se encuentra pensionada por dicho fondo, es decir por COLFONDOS S.A., razón por la cual es el fondo privado de pensiones quien debe resolver cualquier inconformidad respecto de su pensión, concluyendo que el traslado que realizo en su momento del RPMD al RAIS, tiene plena validez conforme al Artículo 2 de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el literal e) del Artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

En ese orden de ideas, de conformidad con la norma en cita, el traslado a la fecha goza de plena validez y además de ello, el traslado de régimen es una potestad única y exclusiva del afiliado, sin que pueda trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, además conforme lo establecido en el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el demandante una vez ha escogido el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que en el caso particular es COLFONDOS S.A.; y decida cambiarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, no le será aplicado el régimen de transición que contempla la norma citada.

La parte demandante suscribió con total conocimiento de causa y aceptación, su vinculación al RAIS. Ahora bien, la escogencia de régimen pensional fue un acto libre y voluntario de la parte actora, razón por la cual, no puede pretender luego de encontrarse pensionada por COLFONDOS S.A., endilgarle a COLPENSIONES la responsabilidad de una decisión propia.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la demandante no tiene fundamento alguno para indicar, que no tenía conocimiento de las circunstancias de su prestación, ello teniendo en cuenta que él mismo de manera libre y voluntaria escogió que entidad administraría su prestación económica. Es así que actualmente la señora ESPERANZA MELO YEPES, tiene un derecho adquirido, concepto reiteradamente detallado en las Sentencias de las altas Cortes, así:

“configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona”, es decir, que para que se configure un derecho adquirido es necesario que antes de que opere el tránsito legislativo se reúnan todas las condiciones necesarias para adquirirlo.

Los derechos adquiridos ostentan el estatus de inmutabilidad, es decir, al haberse reunido los requisitos legales para adquirir un derecho, y en efecto así se cumple, este se vuelve inmodificable y más aun tratándose de Derechos Fundamentales tal y como lo es la pensión de vejez.

Las normas citadas anteriormente y la voluntad expresada tanto en el formulario de afiliación evidenciaron que el ingreso del demandante al RAIS, a través de la vinculación a COLFONDOS S.A., cumplió las exigencias legales para tales fines.

En este punto, es importante señalar que el sistema pensional colombiano se divide en dos regímenes de diferente naturaleza: a). el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – (RAIS), y b). el Régimen de Prima Media (RPM). En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad los aportes pensionales se depositan en una cuenta de ahorro individual a nombre de cada afiliado, es decir, éste es dueño de su propia cuenta. Bajo este sistema, la pensión obligatoria se financia con los aportes efectuados por el afiliado y el empleador, más los rendimientos generados. Si el afiliado es trabajador independiente, los aportes los asume él en un 100%. En algunos casos, la pensión obligatoria también se nutre de los subsidios creados por la Ley, es el caso de la Garantía de Pensión Mínima.

Por su parte, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida los aportes pensionales van a una ‘bolsa común’; asimismo, la financiación de la pensión obligatoria cuenta con la garantía de un fondo común de naturaleza pública que se nutre de los aportes pensionales de sus afiliados. Cuando

los afiliados se trasladan del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual, serán portadores de lo que se conoce como bono pensional.

De igual forma, tampoco se demuestra vicio en el consentimiento o asalto a la buena fe en el momento en que se afilió al Régimen de Ahorro Individual administrado por COLFONDOS S.A. como se alega en la demanda, además para el momento de la afiliación era imposible predecir los Ingresos Base de Cotización sobre los cuales cotizaría la demandante en los próximos años y calcular una futura mesada pensional real en el momento de la afiliación, pues los ingresos económicos podrían variar en relación a los reportados en su Historia Laboral hasta esa fecha.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-086 de 2002, Magistrado Ponente CLARA INES VARGAS HERNANDEZ, ha manifestado que: “para la Corte es claro que el sistema de Seguridad Social en pensiones no tiene por finalidad preservar el equilibrio cuota prestación sino la debida atención de las contingencias a las que están expuestas los afiliados y beneficiarios, además por que el régimen de prestaciones de la seguridad social en pensiones no es un régimen contractual como el de los seguros privados sino, todo lo contrario se trata de un régimen legal de una manera se asienta en el régimen contributivo en el que los empleadores y el estado participan junto a los trabajadores en los aportes que resultan determinantes en la cuantía de la Pensión. De ahí que los afiliados a la seguridad social no ostenten un derecho subjetivo a una cuantía determinada de las pensiones futuras, esto es, las pensiones respecto de las cuales no se ha producido el hecho que las causa” (...)

No se demuestra entonces hasta el momento que la parte demandante haya sido engañada al tomar una decisión desfavorable a sus intereses, más aun, cuando permaneció en el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad por muchos años hasta el año 2020, sin manifestar ninguna inconformidad respecto al desempeño y administración, afianzando su decisión de estar en este Régimen.

Por lo anterior, se tiene que la parte demandante se encuentra válidamente afiliado al Régimen de Ahorro Individual por decisión propia, sin mostrar inconformidad alguna en la administración de sus cotizaciones en los Fondos privados.

En el caso en que el operador judicial declare la nulidad y/o ineficacia del traslado se debe tener en cuenta lo estipulado en las sentencias CSJ SL. 8 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL17595-2017, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, rad. 56174, las cuales hacen referencia a que la AFP en la que se encuentre afiliada la demandante, tiene lugar a reintegrar la totalidad de la cotización, es decir: i) Recursos cuenta individual de ahorro, ii) Cuotas abonadas al fondo de garantía de pensión mínima, iii) Rendimientos, iv) Anulación de bonos pensionales v). Porcentaje destinado al pago de seguros previsionales y gastos de administración.

Así mismo y conforme a lo solicitado por el actor, se trae a colación algunos apartes de los lineamientos estatuidos por la entidad de fecha 14 de enero de 2020, en los cuales se indica que:

4.5. El retorno en cualquier tiempo al RPM, faltando menos de 10 años para la edad de pensión debe realizarse atendiendo: (i) las expectativas pensionales del afiliado y (ii) la sostenibilidad financiera.

En la Sentencia C-596 de 1997 la Corte Constitucional estudió una demanda dirigida contra la expresión "al cual se encuentran afiliados" contenida en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la cual se acusó de desconocer el principio de favorabilidad en materia laboral, colocar



en situación desventajosa a las personas que se encontraban en el régimen de transición y violar el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, al respecto la Corte expresó:

“Justamente por cuanto los derechos a la seguridad social no se tienen por el simple hecho de ser persona humana, como si sucede con los derechos fundamentales o derechos de primera generación, para ser titular de ellos es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos que la ley, de manera general, impone para adquirirlos. Cuando, en vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa de derecho. (...) Las consecuencias jurídicas en uno y otro supuesto son bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, no pueden ser desconocidos por leyes posteriores; no así las simples expectativas de derecho.” (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Posteriormente, a través de la providencia C-789 de 2002, la Corte Constitucional resolvió la demanda presentada por un ciudadano contra los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En la sentencia, la Corte precisó el alcance de derechos adquiridos y meras expectativas en materia pensional, indicando lo siguiente:

“La Sala Plena consideró que las disposiciones demandadas se ajustaban a la Constitución puesto que, en primer lugar, el derecho a obtener una pensión de acuerdo con el régimen de transición no es un derecho adquirido sino “apenas una expectativa legítima, a la cual decidieron renunciar voluntaria y autónomamente, para trasladarse al sistema de ahorro individual con solidaridad”.

En segundo lugar, indicó que ni siquiera puede afirmarse que las normas acusadas frustren tal expectativa ya que sólo “se podría hablar de una frustración de la expectativa a pensionarse en determinadas condiciones y de un desconocimiento del trabajo de quienes se trasladaron al sistema de ahorro individual, si la condición no se hubiera impuesto en la Ley 100 de 1993, sino en un tránsito legislativo posterior, y tales personas se hubieran trasladado antes del tránsito legislativo”.

Por último, precisó que “la protección constitucional a favor del trabajador, que le impide al legislador expedir normas que les permitan renunciar a ciertos beneficios considerados como mínimos no se refiere a las expectativas legítimas, sino a aquellos derechos que hayan sido adquiridos por sus titulares o a aquellas situaciones que se hayan consolidado definitivamente en cabeza de sus titulares”, razón por la cual tal prohibición no aplica en este caso al tratarse de expectativas legítimas y no de derechos adquiridos”.

Adicionalmente, las sentencias C-1024 de 2004, y SU-062 de 2010, de la Corte Constitucional en materia de traslados, indican que nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema, dado que el régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría.

Así mismo, dentro de la aludida jurisprudencia la Corte recordó que “el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato”.

Como se observa, la Corte Constitucional destacó que el derecho a trasladarse NO es absoluto y debe atender criterios de sostenibilidad financiera y expectativas pensionales.

4.6. Desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones - Art. 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.

En desarrollo de los fines esenciales del Estado Colombiano, las instituciones que lo conforman deben propender hacia la salvaguarda de los principios y valores constitucionales conforme a lo dispuesto en la Carta Política, la Ley y los Convenios Internacionales suscritos por aquel.

El Artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, señala:

“El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo.

Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigor de este acto legislativo deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.” (Cursiva, Negrilla y Subrayado fuera del texto original)

Por consiguiente, el artículo 48 de la Constitución Política, estableció dos dimensiones de la seguridad social; por un lado, la concibió como un derecho constitucional fundamental; y, por el otro, como un servicio público de carácter obligatorio el cual se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en aras a la materialización de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, entre otros.

El artículo 334 de la Constitución Política, señala que “La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”, en ese orden de ideas, es necesario que, dando prevalencia al interés general sobre el particular, se tomen las medidas pertinentes en búsqueda de la protección de los recursos que soportan el sistema pensional, conforme a los principios que rigen la Constitución Política, en la medida que el derecho a la seguridad social se encuentra atado al principio de sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera del Estado.

En consecuencia, la declaración injustificada de ineficacia del traslado de un afiliado del RPM a RAIS afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

En esta misma línea se pronuncia la Corte Constitucional en sentencia T- 489 de 2010, al expresar: (...) la Sala se permite destacar dos ideas, relacionadas ambas con la sostenibilidad económica del sistema pensional. Ellas son: a-- La primera tiene que ver con la protección del capital pensional. No se puede permitir “la descapitalización del fondo”, si personas que no contribuyeron a su formación, vienen a último momento, cuando les faltan ya menos de 10 años para concretar su pensión de vejez, a beneficiarse de un ahorro comunitario accediendo a una pensión, cuyo pago desfinancia el sistema. b- En segundo término, desde una perspectiva social se contraría la equidad y se abandona el valor de la justicia material, al permitir a personas que no han contribuido a los rendimientos de los fondos pensionales, entren a beneficiarse y a subsidiarse a costa de las cotizaciones y los riesgos asumidos por otras y no por ellas mismas” (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Debe resaltarse la importancia que en este tema concede la Corte Constitucional a las consecuencias económicas de las diferentes posiciones sobre la sostenibilidad financiera del Sistema.

Así las cosas el principio de sostenibilidad financiera representa la garantía del derecho fundamental a la pensión de los Colombianos de manera sostenida e indefinida y la posición asumida por la Corte en los fallos relacionados con nulidad o inexistencia del traslado entre regímenes pensionales, quebranta el principio de sostenibilidad financiera, en tanto genera una situación caótica que desvertebra la debida planeación en la asignación y distribución de los recursos del Sistema Pensional, al desconocer la irreductible necesidad de que dichas condenas se cumplan previa la ordenada gestión de los recursos que en la mayoría de los casos no están presupuestados en la medida en que surgen, de manera contingente de la declaración judicial respectiva.

La estabilidad financiera se garantiza en la medida en que el sistema general de pensiones percibe y mantiene, a través de medios jurídicos y financieros, los fondos económicos adecuados que le permitan pagar mes a mes a una mayor cantidad de pensionados y obtener un ahorro para precaver la satisfacción de las pensiones futuras, bajo la permanente orientación de subsanar con urgencia cualquier desventaja contra el bienestar general

En sentencias SL413-2018, el alto tribunal menciona:

Por esta misma razón, en casos como el presente, donde se discute la materialización del acto jurídico de la afiliación o traslado, es relevante tener en cuenta los aportes al sistema, no como un requisito ad substantiam actus de la afiliación, como lo sostuvo el Tribunal, sino como una señal nítida de la voluntad del trabajador cuando existen dudas razonables sobre su genuino deseo de cambiarse de régimen.

Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado.

Como se ha pronunciado el alto tribunal en reciente Sentencia SL 373-2021, (...)

“se torna inviable la realización de los efectos de la ineficacia, por cuanto no es posible cesar los efectos jurídicos de las operaciones, contratos y actos que involucran a terceros como aseguradoras, entidades oficiales e inversiones, que según la modalidad pensional en que se encuentre el actual pensionado, hayan concurrido en la administración y gestión del riesgo financiero, entre otras muchas problemáticas de orden financiero, que ocasionarían un déficit económico entre los actores del Sistema que han confluído en la gestión de los recursos a través de relaciones jurídicas válidamente suscitadas en el mundo jurídico del Sistema General de Pensiones, en cumplimiento de obligaciones y deberes contractuales que ya se encuentran consumados y perfeccionados con las consecuencias de orden legal y financiero que ello acarrea” (...).



Respecto de la falta de legitimación, la Corte Constitucional, ha manifestado que:

“La legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material”.

Al respecto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado de manera reiterada, la importancia que se acredite el presupuesto de legitimación en la causa para que las partes puedan actuar dentro de un proceso, en este sentido está el pronunciamiento realizado mediante Sentencia del 25 de mayo de 2011, expediente: 20146 del 19 de octubre de 2011, expediente 19630 en los siguientes términos:

La legitimación en la causa por pasiva.

Con relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a ella, como la "calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso", (Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003.) de forma tal, que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas. Consejo de Estado, sentencia de 25 de julio de 2011, expediente: 20.146.

Entendido así el concepto de legitimación en la causa, es evidente que cuando ella falte, bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria, sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada.

Finalmente, en cuanto al reconocimiento de intereses moratorios, tenga en cuenta el señor juez las sentencias SL4338 de 2019, T-586 de 2012, C-601 de 2000, T-588-2003, C- 1024-2004 y SU-065-2018 de igual manera es de anotar que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, establece:

“ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”.

Que de lo anterior se establece por mandato legal es procedente el reconocimiento y pago de los intereses moratorios que se han causado cuando existe mora o retardo en el pago de las respectivas mesadas pensionales ya reconocidas, de tal manera se considera que proceden los aludidos intereses, única y exclusivamente, a partir de la fecha en que ha sido expedido el acto administrativo mediante el cual se ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones. Así mismo anotan que sobre la suma correspondiente al pago del valor del retroactivo no se causan intereses moratorios, por cuanto la Ley no lo permite”.



## **Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial**

Que conforme a lo anterior no es procedente el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por cuanto como lo expresa la ley los intereses moratorios comienzan a causarse por la demora en el pago de las mesadas pensionales una vez se ha expedido el acto administrativo que reconoce la prestación, situación que no se evidencio en este caso, no generándose así ningún interés moratorio.

La presente certificación se emite en la ciudad de Bogotá a los 24 días del mes de noviembre de 2023.

**MARIA ISABEL CAMPO MARTINEZ**  
**Secretaria Técnica de Comité de Conciliación y**  
**Defensa Judicial de Colpensiones**  
Proyecto: MJUS